

problemas universitarios y política nacional

SERGIO COLMENERO

Los ataques que han sufrido las universidades y muchos de los centros de educación superior obedecen no sólo a causas del momento actual. Debe tenerse presente que su origen data de mucho tiempo atrás. Podría afirmarse que desde el momento mismo en que surge la moderna universidad han existido fuerzas y corrientes contrarias a ella, puesto que, al constituirse en un centro de apertura a todas las corrientes del pensamiento, tiene implícitas tareas que conducen a la discusión, a la crítica, a la renovación y al cambio y que, por lo mismo, afectan a aquellos grupos interesados en mantener el *statu quo*.

En efecto, la universidad, al cumplir las tareas que le son propias en un ambiente de libertad de pensamiento y de crítica, indirectamente está proponiendo alternativas para el cambio social. La universidad es pues un agente de cambio y esto mismo hace que algunos sectores de profesores y estudiantes tomen conciencia de su papel y su compromiso con la sociedad y que piensen que la universidad formadora de cuadros para el sistema debe ser transformada en una universidad crítica de ese mismo sistema.

En México, quizá como resultado de lo anterior, se ha producido en el sector estudiantil una creciente politización, o cuando menos, un mayor conocimiento de los problemas políticos, económicos y sociales que encara la sociedad mexicana.

Estos hechos, de una manera o de otra, han influido en el desarrollo de acontecimientos como los de 1968, en los que el movimiento estudiantil puso de manifiesto, entre otras cosas, una gran capacidad organizativa y de movilización de masas que manifestaron

su frustración y descontento criticando y cuestionando la política gubernamental y, concretamente, los viejos vicios del sistema político mexicano. La respuesta violenta y represiva que ejerció el Estado en contra del movimiento hizo que el sector estudiantil se replagara y reafirmara su posición crítica frente al sistema y frente al gobierno.

Es importante destacar que dichos sucesos pusieron de manifiesto dos cosas. Primero, que era necesario modificar la ruta política, económica y social seguida por el país en los últimos treinta años; y, segundo, que los movimientos estudiantiles por su función crítica, su capacidad organizativa y por las posibilidades de alianza con las luchas obreras y campesinas, podrían jugar en el futuro y bajo ciertas circunstancias un papel importante.

Por todo lo anterior el régimen que inició sus gestiones en 1970 intentó, sobre la base de una serie de reformas al sistema, dar una mayor dinámica al crecimiento económico; pero, sobre todo, traducir ese crecimiento en desarrollo a partir de una mejor distribución de la riqueza. Y es aquí donde se hace evidente una de las mayores contradicciones del sistema político mexicano, pues hay que tener presente que desde la Segunda Guerra Mundial la política de crecimiento del país ha estado basada en una serie de concesiones y privilegios que se otorgaron a la iniciativa privada para que fuera ésta la que impulsara el desarrollo industrial, mientras el Estado se reservó el papel de promotor de obras de infraestructura básica y de alentador de la formación de capitales privados.

Esto explica que en la situación actual sea el sector

privado, y no el sector público, el que detente el poder de decidir la política de desarrollo que ha de seguirse.

De este modo, repetimos, se hace evidente y patente una de las mayores contradicciones del sistema político mexicano, ya que si bien es cierto que existe la imperiosa necesidad de llevar a cabo una serie de reformas políticas, económicas y sociales, que conduzcan a una mejor distribución de la riqueza y a una mayor democratización, también es cierto que estas reformas chocan con los intereses del sector privado que es —en última instancia— el que tiene en sus manos el poder económico y, por lo mismo, gran poder político.

Es obvio que esta dicotomía entre sector público y sector privado o entre gobierno e iniciativa privada, en la realidad no es tan simple y esquemática, y la situación se vuelve compleja y difícil de estudiar cuando se observa que la propia dinámica político-económica seguida por nuestro país ha propiciado la formación de intereses, alianzas y vínculos entre grupos e individuos de uno y otro sector, de manera que resulta difícil, cuando no imposible, fijar los límites entre unos y otros.

Sin embargo, puede afirmarse que mientras el gobierno lleve a cabo acciones que favorezcan a la iniciativa privada, ésta no manifestará ninguna oposición; pero, si las acciones que lleva a cabo el gobierno no sólo no la favorecen sino que la afectan, sus miembros ejercen todo tipo de presiones para imponer directrices políticas acordes con sus intereses.

Esto explica que, cuando el actual régimen intenta llevar a cabo algunas medidas reformistas, los grupos que ven amenazados sus intereses se polarizan y manifiestan su oposición al cambio. En efecto, todo parece indicar que los distintos grupos de la iniciativa privada —banqueros, industriales y empresarios en general—, vinculados de una manera o de otra a políticos incrustados en el gobierno, ante el anuncio de que se llevarían a cabo ciertas reformas, a fin de presionar y defender sus intereses, y aparte de un boicot de tipo económico, han emprendido una campaña de socavamiento y de alteración del orden público con el fin de crear conflictos que debiliten y desprestigien al gobierno para de este modo estar en una mejor posición de negociación y, por lo mismo, en condiciones de seguir imponiendo sus particulares intereses.

Esto no quiere decir, desde luego, que la lucha política en México quede reducida únicamente a una pugna entre las clases dominantes, pues debe tenerse

presente que los movimientos populares de estudiantes, campesinos y obreros han cobrado una dinámica propia. En este sentido, también es necesario destacar que los movimientos estudiantiles al impugnar al sistema político mexicano han establecido alianzas con ciertos sectores populares y se han comprometido en sus luchas, lo cual en ocasiones los ha llevado a enfrentamientos con el gobierno.

Puede afirmarse, que este tipo de enfrentamientos entre el gobierno y los movimientos estudiantiles aliados a luchas y demandas populares seguirá produciéndose mientras aquél no lleve a cabo medidas que satisfagan las justas demandas populares. Por ello, para evitar provocaciones es indispensable que los movimientos estudiantiles definan claramente los objetivos de sus luchas. De no hacerlo así, existe el peligro de que los movimientos estudiantiles sean desvirtuados y aprovechados por individuos o grupos extremistas que ostentándose como ultrarrevolucionarios en realidad desempeñan el papel de provocadores que coinciden con los fines de los grupos reaccionarios.

Hay que tener muy presente que en nuestro contexto los grupos más reaccionarios y opuestos al cambio están interesados en atacar a las universidades porque al atacarlas logran o alcanzan objetivos múltiples y alternativos, por ejemplo: imponer el terror como forma de vida en su seno; boicotear y destruir objetivos y tareas eminentemente universitarias y evitar la acción democratizadora de éstas; ponerlas en crisis, paralizarlas o desmovilizarlas y, de este modo, sugerir que son incapaces de autorregirse. Todas estas acciones favorecen a la derecha.

Quizá podría plantearse como hipótesis que muchos de los conflictos que se han presentado en el seno de las universidades han sido alentados y promovidos desde el exterior de los campos universitarios con la intención de formar ante la opinión pública, mediante la manipulación de la información, la idea de que en las universidades priva el caos, de que son, como siempre han señalado sus enemigos incapaces de autogobernarse e incapaces de solucionar sus problemas. De este modo se crean, artificialmente, las condiciones que conducen, según lo previsto, a que los estudiantes o la universidad aparezcan como enemigos de ciertos sectores de la sociedad y que en un momento dado estos sectores, mediante la manipulación “presionen” para que la fuerza pública intervenga en ellas. Esto crea, nuevamente, una situación tensa y conflictiva entre la universidad y el Estado y como hemos visto, en la coyuntura actual del

país cualquiera de estas situaciones satisface, en alguna medida, las expectativas de las fuerzas reaccionarias y opuestas al cambio.

No es casual, por ejemplo, que sea en los Estados de Puebla, Nuevo León y Sinaloa en donde se han suscitado los más graves ataques a las universidades. Recuérdese que es precisamente en estos Estados en donde se han localizado tradicionalmente los grandes capitales y las corrientes políticas más conservadoras.

La idea central de este trabajo es demostrar, en base a una revisión hemerográfica de 1972 y los primeros meses de 1973, que existe una correlación evidente entre los principales acontecimientos políticos que han habido en el país y el surgimiento de problemas y conflictos en las universidades. Nuestra hipótesis es que, si bien es cierto que muchos conflictos estudiantiles han tenido como origen demandas democráticas y populares justas, también lo es que otros conflictos han sido provocados y manipulados por la derecha, aprovechando, desde luego, la inconformidad que existe en el ámbito estudiantil. En efecto, hay indicios de que la derecha, en ocasiones, ha aprovechado la falta de organización y claridad de objetivos de los movimientos estudiantiles para propiciar, mediante el manejo de los provocadores, situaciones que se han traducido en derrotas o reveses para las fuerzas progresistas.

Intentaremos demostrar esto al hacer una reseña y análisis de los principales acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el país durante 1972 y los primeros meses del presente año y de los ataques que sufrieron las universidades en el mismo lapso.

Durante el mes de enero de 1972 se puede observar que privaba en el ambiente estudiantil, sobre todo en las preparatorias, gran intranquilidad. Grupos de porristas desplegaron gran actividad y varias comisiones de maestros, alumnos y padres de familia denunciaron con insistencia ante las autoridades que dichos grupos estaban compuestos de ex-estudiantes que se habían convertido en provocadores políticos a sueldo y en traficantes de drogas.

En febrero, el 12, los diarios dieron la noticia de que la Universidad Autónoma de Sinaloa había sido ocupada por la policía del Estado. En esa ocasión el rector de la UNAM, González Casanova, señaló que se había empleado el clásico juego de "usar extremistas de izquierda que justifican la represión y que éste es un esquema de conducta de la extrema derecha" y advirtió también que aquí había grupos que trataban de provocar la violencia.

Ese mismo día apareció la noticia de que en Puebla el Consejo de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) pedía la intervención del Gobierno Federal para que desalojara a 25 personas armadas que se habían posesionado de un edificio universitario.

Pocos días después apareció la noticia de que a 8 de los estudiantes detenidos en Sinaloa se les había declarado formal prisión lo que provocó nuevas manifestaciones, tanto en Sinaloa como en el D. F.

Hay que señalar que estos acontecimientos que alteraron el orden en Puebla y Sinaloa se produjeron casi al mismo tiempo que en la política nacional se operaba un cambio importante: la remoción del presidente del PRI, Manuel Sánchez Vite, quien tenía innegables vínculos con el líder de la CTM y con el grupo político, ahora desplazado, del ex-regente Martínez Domínguez.

Otra correlación que se puede establecer es, que cada vez que el presidente Echeverría emprendía un viaje al exterior, en los días anteriores o subsiguientes al mismo, se producían actos tendientes a alterar el orden y ataques a las universidades.

A fines de febrero se anunció que el presidente visitaría Japón en los primeros días de marzo. Dicho anuncio coincidió con la denuncia de un grupo de profesores universitarios de Puebla, quienes señalaban que había una conspiración contra la UAP y que existían grupos de pandilleros con muchos recursos y gozando de protección policiaca, lo que suponía la existencia de grupos, no visibles, que los alentaban y financiaban. También se produjeron encuentros entre grupos antagónicos de estudiantes y esto hizo que se reunieran los directores de escuelas universitarias de Puebla para elaborar un documento dirigido al presidente en el que pedían que se sancionara a los pandilleros.

En la primera semana de marzo la torre de rectoría de la UNAM fue tomada durante varias horas por un grupo de estudiantes entre quienes se encontraban Castro Bustos y Falcón, provocadores que más adelante habrían de ocuparla durante un mes. En esa ocasión manifestaron que la ocupación era en "protesta por la presencia del rector González Casanova en la comitiva que acompañaba al presidente en su viaje al Japón" ya que aquél no había consultado a la comunidad universitaria para aceptar la invitación.

Durante ese mes privó un clima de zozobra por la actividad de grupos de porristas que se dedicaron a atacar varios planteles, principalmente el de la Prepa-

ratoria Popular en la que el día 28 disolvieron a tiros una reunión.

En abril, se avisó que el día 17 el presidente Echeverría visitaría Chile, que se entrevistaría con Allende y que estaría en la UNCTAD. El día 10, hubo un falso aviso de que estallarían dos bombas, una en Nacional Financiera y otra en el Banco de Cédulas Hipotecarias. Simultáneamente, en la Ciudad Universitaria se corría el rumor, desmentido después, de que en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Naucalpan había habido un enfrentamiento entre policías y estudiantes con un saldo de varios heridos. El día 14, el rector González Casanova denunció la provocación en la UNAM y señaló que se pretendía alterar la vida de la Universidad con actos de violencia y provocación.

También por estas fechas grupos de izquierda aprovecharon la coyuntura y presionaron para la satisfacción de demandas legítimas. Así, se organizó una marcha de campesinos que demandaban tierra y un grupo del magisterio convocó a una manifestación para el sábado 15, en apoyo de su demanda de mejores salarios; se dijo que a dicha manifestación se unirían los comités de lucha de la UNAM.

La caravana de campesinos fue interceptada antes de que arribara a la capital y se dijo que serían satisfechas sus demandas. La manifestación no fue permitida y ante el aparatoso despliegue de fuerza que hicieron las autoridades, los organizadores decidieron suspenderla.

El 16 de abril inició el presidente Echeverría su viaje a Chile y los hechos de violencia y provocación y los ataques a las universidades se multiplicaron. Hubo nuevos ataques contra la Preparatoria Popular; una falsa alarma sembró el pánico en la Secretaría de Educación Pública, pues se avisó que estallarían dos bombas en el interior de la dependencia.

En Puebla, los permisionarios de transportes subieron las tarifas, hubo una manifestación estudiantil de protesta y se produjo un choque entre camioneros y estudiantes. En ese enfrentamiento actuaron como aliados de los camioneros, miembros de los grupos Juventud Nueva y Náhuatl, de conocida orientación anticomunista.

Al mismo tiempo, en Monterrey, hubo conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), primero por divergencias entre grupos que apoyaban al rector Ulises Leal y otros que lo impugnaban y después porque un grupo de seudoestudiantes desalojaron del edificio y golpearon a un grupo de maestros.

Acto seguido, el 2 de mayo, un grupo de estudiantes que participaban en el desfile obrero insultó al gobernador, y el desfile fue interrumpido. Días después fue arrojada contra la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL una bomba molotov.

Coincidiendo con estos sucesos ciertos sectores del clero desplegaron una gran actividad política y declararon a la prensa que pensaban que debía modificarse la Constitución para que se les permitiera participar en la política. También en esta época se dio a conocer la existencia de grupos paramilitares en algunos Estados del Bajío. Estos hechos no carecían de importancia; así lo demuestran las declaraciones de los dirigentes del PRI quienes se vieron obligados a manifestar que debería haber una condena general "ante la actividad de los grupos fascistoides" y que "deberíamos preocuparnos y mantenernos alerta ante la aparición de estos grupos", también se señaló que el neofascismo no hallaría en México un campo propicio para desarrollarse.

En los primeros días de junio se anunció que el presidente Echeverría visitaría los Estados Unidos. Automáticamente los actos de violencia y terrorismo, principalmente en los centros de educación superior, se multiplicaron. En la Universidad de Nuevo León se agudizaron los conflictos entre grupos simpatizantes del rector Ulises Leal y grupos opositores.

En Puebla aparecieron pintas en paredes y muros, tales como: *Cristianismo sí, comunismo no; fuera de la ciudad o muerte*, dirigidas a los directores de escuelas y facultades universitarias.

En la ciudad de México varios comités de lucha de la UNAM y del IPN acordaron llevar a cabo una manifestación el 10 de junio para demandar el castigo de quienes un año atrás habían atacado y causado la muerte de un grupo de manifestantes. Dicha manifestación no se realizó porque la policía, con gran despliegue de fuerza lo impidió. El día 12 se dio la noticia de que habían estallado bombas en los edificios del PRI, la CTM y el INJUVE.

Finalmente, el 13 de junio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM se produjo una balacera entre grupos antagónicos de porristas resultando muertos dos porristas y cuatro estudiantes heridos. En dichos sucesos se vieron envueltos, nuevamente, los mismos sujetos que desde tiempo atrás venían cometiendo actos de violencia y provocación dentro de la UNAM.

En esa ocasión el rector González Casanova, señaló que tales acontecimientos representaban una agresión a la UNAM y que "los verdaderos culpables habían

manejado de la manera más aviesa a distintos grupos, con un poder, un respaldo y una habilidad que hacían de éste un nuevo crimen ante el cual todo universitario digno (levantaba) su protesta”.

Más adelante, en un llamamiento que hizo a la comunidad universitaria, advirtió que se planeaban acciones ominosas contra la UNAM.

Durante el mes de julio los hechos de política nacional más sobresalientes fueron que el gobierno, a través de algunos secretarios de Estado, dejó ver que dado que, el radio y la televisión no cumplían con su tarea educativa, era necesario hacer reformas a la Ley de Radio y Televisión. Obviamente dichas reformas estarían encaminadas a dar al Estado una mayor intervención y control sobre esos medios. Esto, desde luego, produjo gran malestar entre los poderosos grupos que se verían afectados. También por esas fechas se empezó a organizar un movimiento tendiente a sindicalizar a los empleados bancarios, hecho que los banqueros vieron como una amenaza. En el ámbito universitario, mientras tanto, acontecía lo siguiente: En Monterrey el líder de los trabajadores de la UANL, fue secuestrado y golpeado por un grupo opositor al rector; en Culiacán se registraron actos de violencia porque la policía golpeó y aprehendió a más de un centenar de estudiantes durante una manifestación de protesta por la muerte de dos campesinos que participaban en una caravana demandando tierra. Casi al mismo tiempo en Puebla, después de una larga cadena de ataques y amenazas de las fuerzas más reaccionarias, fue muerto el profesor Joel Arriaga Navarro, director de la Preparatoria Poblana.

A fines de julio aparecieron en la prensa unas declaraciones de Terrones Langone, presidente de la CANACINTRA, en las que exponía que “una crisis de la responsabilidad se estaba experimentando en el sector estudiantil, y sin duda dentro de un gran número de quienes tenían la elevada misión de conducir y formar integralmente a la juventud mexicana”. Estas declaraciones son significativas porque reflejan puntos de vista que comparte la iniciativa privada respecto a la universidad y porque en ellas subyace la idea, siempre esgrimida por estos grupos, de que la UNAM es incapaz de autogobernarse y que, por lo mismo, es necesario intervenir en ella y poner orden.

Y tal parece que para validar esta idea los provocadores Castro Bustos y Falcón, que desde hacía tiempo venían agitando en la UNAM aprovechando e inflando un problema administrativo —la admisión de los

normalistas en la Facultad de Derecho— tomaron la torre de rectoría y se dedicaron durante el mes de agosto a realizar todo tipo de provocaciones. El rector y todos los directores de escuelas y facultades hicieron un llamado a la comunidad universitaria en el que señalaban que los hechos habían sido provocados por personas ajenas a la UNAM y que la comunidad universitaria debería entender que las autoridades universitarias no podían formular acusaciones tendientes a propiciar la intervención de la fuerza pública en la universidad, y que sólo podían y debían pedir que las autoridades del orden común aplicaran el derecho con exactitud. Por su parte, la Procuraduría declaró que había orden de aprehensión contra Castro Bustos y Falcón por los delitos de amenazas, disparo de arma de fuego y daño en propiedad privada. . . pero que la autoridad se había abstenido de entrar a la Universidad y que los acusados no salían de la Ciudad Universitaria.

Esta ambigüedad jurídico-política del problema quedó reconocida incluso en los círculos gubernamentales cuando el doctor Pedro Zorrilla, que fue nombrado por esas fechas nuevo Procurador del Distrito Federal, reconoció que había fundamento legal para que la Procuraduría actuara contra Castro Bustos, pero aceptaba que el problema tenía implicaciones políticas en un amplio sentido.

El presidente Echeverría también declaró el 15 de agosto que el Estado respetaba la autonomía y que no se aprehendería a dichos individuos “a menos que exista una petición expresa de las autoridades de la UNAM”, y dos días después se vio obligado a declarar que autonomía no significaba extraterritorialidad.

Quizá para allanar el camino en busca de una solución fue que se les concedió amparo a Castro Bustos y a Falcón a condición de que se presentaran ante el juez de Coyoacán en el plazo de una semana, cosa que no hicieron. En cambio, siguieron cometiendo todo tipo de arbitrariedades hasta el 31 de agosto —un día antes del informe presidencial— en que abandonaron la torre de rectoría, pero no la Ciudad Universitaria.

Del informe presidencial del 1º de septiembre destaca la parte política. En ella se dejaba ver que el poder había sido alcanzado por un grupo disidente de la propia clase gobernante por lo que, habían habido pugnas dentro y fuera del gobierno. Asimismo, se anunciaba que el modelo de desarrollo económico por medio del cual el Estado había tendido a favorecer a la empresa privada, reduciéndole impuestos, avalando tran-

sacciones, endeudando al país y ampliando el dominio de los Estados Unidos, sería cambiado.

Una semana después se llevó a cabo la mexicanización de la Azufretera Panamericana, que representa el 75% de la producción nacional. Antes el Estado había asumido el control de Teléfonos de México con el 51% de acciones. Por esas fechas, el líder de la CTM, Fidel Velázquez, desplegó una gran actividad, abrió varios frentes y lanzó todo género de acusaciones contra el gobernador de Sonora, contra el obispo de Cuernavaca, Méndez Arceo y contra los líderes Galván y Vallejo. Amenazó, en fin, con llevar a cabo manifestaciones y huelgas. En esa época estallaron cuatro bombas: una a un costado de Palacio Nacional y tres en Morelia. La prensa minimizó la noticia y habló de petardos.

Por lo que se refiere a las universidades aparecieron en la prensa una serie de desplegados de tinte anticomunista en los que se atacaba a los rectores de la UNAM y de la UANL. Se les acusaba de que por sus ideas izquierdistas estaban llevando a dichas universidades al caos. En Monterrey se desató, poco después, una ola de violencia, se produjeron tiroteos entre estudiantes y empleados del Hospital Universitario de Nuevo León y en virtud de ello el rector Ulises Leal solicitó la intervención del presidente Echeverría dado que ante la agresión el gobierno local mostraba indiferencia.

En los primeros días de octubre destacaron las declaraciones del funcionarios del gobierno mexicano en el sentido de que se debía ejercer control sobre las inversiones extranjeras, programar el crecimiento y controlar la compra de tecnología adecuada. En la Cámara de Diputados los cuatro partidos manifestaron que la agresión de los consorcios internacionales contra Chile era también una agresión a México.

Por todo esto, el embajador de Estados Unidos en México, McBride manifestó su preocupación de que cambiasen "las reglas del juego" para las inversiones extranjeras en México. El gobierno mexicano, a través del subsecretario de Industria y Comercio, Campillo Sainz, respondió que sí estaban cambiando las reglas del juego y recordó a los inversionistas norteamericanos nuestras leyes.

La misma tónica se dejó ver días después cuando el PRI llevó a cabo su VII Asamblea Nacional. El presidente del PRI, Reyes Heróles, subrayó que la meta fundamental de ese partido era crear una nueva sociedad; también se ratificó el pacto de la unidad de los tres sectores y se hizo hincapié en la necesidad de que

fuese el Estado el que regulara y orientara la inversión nacional y extranjera.

Mientras esto sucedía en el Distrito Federal, en Puebla tuvieron lugar enfrentamientos entre estudiantes de la UAP y permisionarios de líneas de transporte, resultando herido de bala un estudiante. Los choques continuaban y el gobernador Bautista O'Farrill culpó al Partido Comunista de la intranquilidad prevaleciente en Puebla. Individuos y grupos paragubernamentales promovieron entonces un mitin de apoyo al gobernador; en dicha manifestación participaron, indistintamente, la Banca, los Caballeros de Colón, la CTM, la CROC, las Cámaras de Comercio y Ligas Campesinas. En un mitin de corte fascista el gobernador pidió al procurador la acción judicial contra seis funcionarios de la UAP, incluido el rector, y contra varios estudiantes. Días después Bautista O'Farrill declaró que del subsidio de la UAP se pagarían los daños que causarían los estudiantes. Por las mismas fechas en Monterrey —extraña coincidencia— hay un alza en las tarifas de los camiones, hay manifestaciones de descontento y enfrentamientos entre estudiantes y la policía. Un estudiante resultó herido y en protesta se quemaron seis autobuses. En respuesta se promovió una manifestación de los más diversos sectores, igual que en Puebla, para pedir al gobernador del Estado "que reprimiera los desmanes".

El 21 de octubre el rector González Casanova hizo unas declaraciones fuera de lo común, en las que señalaba, concretamente, que los grupos oligárquicos de Puebla y Monterrey estaban agrediendo a las universidades. Un día después, el Consejo Universitario apoyó plenamente las declaraciones del rector.

Simultáneamente en Tepic se estaba celebrando la reunión anual de la Asociación Nacional de Universidades e Instituto de Enseñanza Superior (ANUIES), en la que se produjeron muchas declaraciones importantes. Entre ellas destacan unas del secretario de Educación, Brabo Ahúja, quien señaló que el Estado nunca emplearía presiones económicas contra las universidades; lo cual puede ser interpretado como la respuesta del gobierno federal a las amenazas del gobernador Bautista O'Farrill. Sin embargo, en la clausura de la ANUIES, el 28 de octubre, el presidente Echeverría en aparente desacuerdo con las declaraciones de los rectores que señalaban que los ataques a las universidades provenían de grupos ajenos a la misma, declaró "... Que cuando la explicación de los problemas que aquejan a una institución es buscada sistemáticamente fuera de ella misma, se corre el riesgo de abdicar a la

responsabilidad de enmendarlos.” Y más adelante subrayó que “las dificultades y acechanzas que afrontan las instituciones de cultura son las mismas que afrontan el pueblo y el gobierno para reorientar el rumbo de su desarrollo independiente”. Declaraciones de las que se puede concluir que, si bien se reconocía que se estaban creando problemas tanto a las universidades como al gobierno también es cierto que se pedía a las autoridades universitarias que no abdicaran a la responsabilidad de enfrentar sus problemas.

En los meses de noviembre y diciembre los conflictos universitarios ocuparon la primera plana de los periódicos.

En Nuevo León, al aproximarse las elecciones para la gubernatura del Estado, fue designado precandidato del PRI el procurador del Distrito Federal Pedro Zorrilla, hecho que los distintos grupos políticos del Estado —incluso algunas corrientes del mismo PRI— interpretaron como una imposición del Gobierno Federal.

Como es de suponerse, los conflictos en la Universidad Autónoma de Nuevo León se recrudecieron. En una semana se produjeron dos enfrentamientos a tiros entre grupos antagónicos en el Hospital Universitario de Monterrey; en la UANL, se escindió la Junta de Gobierno, y una de las partes desconoció al rector Ulises Leal y nombró en su lugar a Lorenzo De Anda. Nada de esto fue aceptado o reconocido por el Consejo Universitario. En cambio, el gobernador Farías sí “reconoció” a De Anda y le entregó el subsidio del gobierno estatal para la universidad.

Poco antes el gobernador Farías y el alcalde Camelo, aspirante a la gubernatura, habían sido acusados de violar la autonomía y de intentar influir sobre los miembros de la Junta de Gobierno para que nombraran rector a De Anda.

En Puebla el 20 de diciembre, bajo el clima de tensión y de violencia ya conocidos, fue asesinado el Dr. Enrique Cabrera, funcionario de la universidad.

En la UNAM, mientras tanto, el conflicto que se había suscitado a fines de octubre, por la demanda de los trabajadores de un contrato colectivo, había ido creciendo. Los trabajadores en apoyo de sus demandas realizaron primero paros parciales y después una huelga que durante noviembre, diciembre y la primera semana de enero mantuvieron casi totalmente paralizada a la Universidad.

Hay que señalar que si bien es cierto que muchas de las demandas de los trabajadores eran justas, también

lo es que hubo momentos clave en los que el conflicto pudo resolverse. Pero en dichos momentos los líderes de los trabajadores se mostraron especialmente intransigentes en las negociaciones con las autoridades universitarias.

Por ejemplo, el 16 de noviembre, en una Junta del Consejo Universitario, el rector González Casanova propuso a los trabajadores, a nombre del Consejo Universitario, un convenio colectivo sin presiones de huelga y gran número de prestaciones económicas.

Todo ello fue rechazado por los trabajadores sin siquiera discutirlo. Un día después el rector presentó su renuncia argumentando que sus esfuerzos habían sido inútiles y que incurriría en grave responsabilidad al dejar que siguiera el asedio a la universidad y a su autonomía.

Se produjo entonces en la comunidad universitaria una corriente de opinión para que la Junta de Gobierno no aceptara la renuncia.

La Junta de Gobierno se reunió con González Casanova, quien prometió analizar la crisis en busca de una solución y meditar acerca de su renuncia.

El 23 de noviembre el rector fijó 3 condiciones para retirar su renuncia:

1. Que se levantara el paro y que se discutiera el ofrecimiento que había hecho el Consejo Universitario en su sesión del 16 de noviembre.

2. Que en las facultades, escuelas e institutos se crearan consejos generales internos mixtos (de profesores, estudiantes y trabajadores), que aseguraran la forma más democrática y efectiva al gobierno de la universidad y que se estudiaran y, en su caso, se presentaran proyectos para reformar la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario. Finalmente, hacía una petición especialmente dirigida al gobierno:

3. Se requeriría que el gobierno de la República abierta y expresamente, decida impedir los delitos del orden común contra la UNAM, ejerciendo bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, el derecho positivo en forma tal que no quepa lugar a dudas de que no hay lenidad o arbitrariedad en el uso del mismo, ni impunidad para los autores materiales e intelectuales de las agresiones a la Universidad.

Un día después, en el desayuno con 600 intelectuales y entrega de Premios Nacionales, el presidente Echeverría anunció que próximamente enviaría a las Cá-

maras una iniciativa de ley para dar garantía constitucional a la autonomía.

En este momento todo parecía indicar que había absoluto acuerdo por parte del gobierno ante las demandas de la Universidad para detener los ataques de los provocadores. Sin embargo, días después reapareció Falcón en la universidad y en franca provocación agredió a los directores de Medicina, Comercio y Derecho. Poco después Falcón abandonó la Ciudad Universitaria y la policía dijo que lo buscaba, pues tenía 6 órdenes de aprehensión contra él.

En los primeros días de diciembre el presidente Salvador Allende visitó México. Es sobresaliente el discurso que pronunció en la Universidad de Guadalajara. En él señalaba que la Revolución era hecha por los obreros y los campesinos y que el deber de los estudiantes era estudiar. Esta frase sacada del contexto global del discurso y pronunciada por el presidente de un país que está intentando reformas que conduzcan al socialismo fue aprovechada, explotada y ampliamente difundida por los enemigos de la Universidad.

En la UNAM, mientras tanto, continuaban las negociaciones entre los huelguistas y los representantes de las autoridades universitarias sin que se llegara a ningún acuerdo.

El día 6 reapareció Falcón en la Universidad declarando que había salido por unos días y que —no obstante la vigilancia policiaca que rodeaba a la ciudad universitaria— podía entrar y salir libremente.

Al día siguiente, el rector González Casanova pidió que se hiciera efectiva su renuncia, puesto que no se habían cumplido las condiciones que había fijado.

A partir de ese momento la Junta de Gobierno de la UNAM se dio a la tarea de auscultar a la comunidad universitaria. Mientras la prensa se dedicaba a presentar una imagen deteriorada y caótica de la Universidad, con notas y reportajes que hacían pensar que la Ciudad Universitaria se encontraba en ruinas y que los investigadores y científicos se veían obligados a “exilarse” para poder seguir sus investigaciones.

Desde luego la iniciativa privada encabezó los ataques declarando que la pérdida del semestre para 155 mil estudiantes representaba un atraso tecnológico de 10 años para el país. Estos ataques continuaron aún después del 4 de enero en que fue nombrado rector de la UNAM el doctor Guillermo Soberón.

Poco tiempo después, en el conflicto entre los trabajadores y la UNAM se llegó a un acuerdo y las actividades se reanudaron.

Durante el mes de febrero lo más sobresaliente en la política nacional fue el incremento que cobró la demanda de los obreros por una semana de 40 horas. Dicha demanda fue encabezada por el líder de la CTM, Fidel Velázquez, quien a lo largo del mes polemizó con todos los representantes de los sectores patronales que, obviamente se oponían a dicha demanda, argumentando que bajaría la productividad, que encarecerían los productos y que aumentaría el desempleo. Al finalizar el mes lo más importante había sido la propuesta de que el problema fuese estudiado por la Comisión Tripartita formada por representantes de los sectores público, privado y obrero.

El punto más alto de la presión de los trabajadores fue una concentración promovida por la FTDF que reunió a cerca de 100 mil trabajadores en el Monumento a la Revolución y que puso de manifiesto la capacidad de movilización de las centrales afiliadas a la CTM.

Durante este mes muchas universidades se vieron inmersas en conflictos. En Monterrey el gobernador Farías declaró que la agitación universitaria en ese Estado era producto de la falta de “buen sentido”, pues los “provocadores” no habían expuesto ninguna tesis valedera. También rechazó, por considerarlas exorbitantes, las peticiones que hacían los trabajadores a las autoridades de la UANL y se informó que el rector De Anda había cesado a 300 trabajadores de distintas dependencias, la mayoría de los cuales simpatizaba con el otro rector en funciones, Ulises Leal.

En respuesta, un líder del grupo sindical “provisional” del sindicato de trabajadores de la UANL acusó al rector Ulises Leal de no haber hecho efectivos los aumentos de sueldo que se habían autorizado en la UANL.

En Puebla en el edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla apareció un cadáver que se suponía era el de un policía. El rector de la UAP, Sergio Flores, señaló que lo anterior no era sino una maniobra, demasiado burda, para comprometer a los universitarios.

Asimismo, anunció que pediría el desafuero del gobernador Bautista O’Farrill, porque era un transgresor del poder. Dijo además que socilitaría una auditoría federal para demostrar que en la UAP había un buen manejo de los fondos. Como respuesta apareció dos días después en *Excelsior* (el día 8) un desplegado a media plana, firmado por cuatro asociaciones de padres de familia y un bloque de maestros y alumnos, que acu-

saban al rector de "proteger a su pandilla" y de mal manejo de los fondos de la UAP.

En Guadalajara el día 15 se desató la violencia entre miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) con saldo de 4 muertos. En Morelos, también a mediados del mes, hubo problemas entre las autoridades y los trabajadores de la Universidad por aumento de salarios y reconocimiento de su sindicato.

En la UNAM el STEUNAM corrió el rumor de que se podía volver a la huelga, pues las autoridades habían despedido a 400 trabajadores supernumerarios. Las autoridades aclararon en un desplegado que apareció en los principales diarios que los casos de los supernumerarios de acuerdo con lo establecido en el convenio, serían estudiados y que, mientras tanto, se les seguiría pagando regularmente.

El día 20 fue nombrado director de Arquitectura René Capdeville. Este nombramiento no fue aceptado por la comunidad de Arquitectura que lucha por implantar formas de autogobierno. Se produjeron enfrentamientos y en un desplegado los partidarios del autogobierno denunciaron la provocación y la imposición que, según ellos, por segunda vez hacía la Junta de Gobierno de un director a esa escuela.

Coincidiendo con este movimiento y para presionar, los trabajadores suspendieron las pláticas con las autoridades de la UNAM. Finalmente, el día 28, apareció la noticia de que el Consejo Universitario había aprobado el Convenio Laboral y que se había formado una comisión de maestros y alumnos que estudiarían el caso de Arquitectura. En dicha comisión figuraban los profesores Juan Casillas, Víctor Flores Olea, Fernando Salmerón, J. L. Ceceña y Ricardo Guerra.

Durante el mes de marzo continuó en su apogeo la demanda de las 40 horas. A ello, los grupos empresariales, industriales y patronales respondieron con un encarecimiento de los productos de primera necesidad y la Secretaría de Industria y Comercio declaró que pondría en marcha una campaña para orientar al público en la compra de buenos productos a precios bajos; que vigilaría que se respetaran los precios autorizados e intervendría, a través de una legítima competencia, cuando los precios fuesen alterados.

Los empresarios respondieron que el gobierno, a través de la CONASUPO, competía en forma desleal contra ellos.

Por lo que se refiere a los centros de educación superior del Distrito Federal, es de notar que durante este mes algunas autoridades universitarias como el

licenciado Domínguez Vargas, secretario general de la UNAM, el doctor Barragán Sánchez, secretario general del IPN y el licenciado Rangel Guerra, secretario general de la ANUIES, hicieron declaraciones en las que se hacía hincapié en la necesidad de poner un límite al crecimiento de la demanda de enseñanza media y superior en el Distrito Federal, vía exámenes de admisión selectivos.

Estas declaraciones provocaron opiniones encontradas en el seno de los centros de educación media y superior y dio lugar a que en la primera semana de abril los profesores del Consejo Sindical de Enseñanza Media y Superior expusieran ante un reportero de *Excelsior* (7-IV-73) que la eliminación de aspirantes a la UNAM era de carácter típicamente clasista, ya que tendía a acentuar y perpetuar las diferencias en favor de aquellos que, a partir de una mejor situación económica, tienen una amplia ventaja sobre los demás. Además, señalaban que la demanda de servicios educativos en el Distrito Federal, sólo podría ser examinada y resuelta dentro del contexto educativo nacional y no pretendiendo rebajar artificiosamente los requerimientos de la población joven del país que vive en el Distrito Federal, y que ocurría a él, no sólo en demanda de servicios educativos, sino también en busca de nuevas y mejores formas de vida.

A mediados de marzo el subdirector de la Preparatoria No. 4 fue atacado por unos porristas. Ante ese hecho las autoridades universitarias pidieron que interviniera la Procuraduría y el rector Soberón declaró el 29 de marzo que la UNAM no podía consentir que el caos se institucionalizara y que los delitos del orden común no estaban amparados en el régimen legal de la autonomía universitaria... y que los universitarios eran una comunidad de cultura, no de excepción legal en nuestro país y que por lo mismo no estaban sustraídos a las leyes que rigen la vida de todos los mexicanos.

Estas declaraciones y una campaña de prensa en la que se daba gran publicidad a ciertos delitos (robos y asaltos) cometidos en la UNAM y en otros centros de educación superior desembocaron en una cacería de porristas.

Sin embargo, la forma en que se desarrollaron los acontecimientos llevó a muchos universitarios a las siguientes reflexiones: 1. Que las detenciones de estos delinquentes representaban un indicador de que el Poder Judicial estaba cumpliendo sus funciones y la pregunta que surgía era ¿por qué antes no y ahora sí?, y

2. Que la detención de delincuentes reclutados del lumpenproletariado podía ser el inicio de una escalada que quizá podría desembocar en una cacería de estudiantes o profesores por motivos políticos o ideológicos, ya que la idea de que la fuerza pública intervenga en la Ciudad Universitaria es un proyecto seductor para muchos.

Por ejemplo, el profesor universitario Alfonso Trueba en su artículo semanal de *Excelsior* (5-IV-73) escribió que si se cometían delitos en la Universidad y ésta no era una ínsula, sería conveniente que se instalara una delegación del Ministerio Público con los agentes de la policía judicial que fueran necesarios, en la misma Ciudad Universitaria, para investigar y perseguir los delitos que ahí se cometieran.

De todos estos sucesos es importante destacar la vinculación que por años ha existido entre los grupos de porristas y la fuerza pública.

El estrecho vínculo entre policía y porristas quedó explicitado y reconocido públicamente (y no refutado) en las declaraciones que uno de los porristas detenidos hizo a la prensa el 7 de abril. En esas declaraciones, como veremos más adelante, se puede captar el proceso de corrupción a que se ha conducido a ciertas capas de la población que son víctimas de la explotación, la ignorancia y la pobreza.

Entre otras cosas el porrista Morell expresó:

Yo siempre estuve alineado, trabajé para la policía; no sé por qué me abandonan ahora. Nosotros cumplimos nuestra misión, ahora que cumplan ellos. Así es la policía, así le hacen a todos los grupos represivos que forman, los usan mientras sirven y entonces les dan todo, pero pasado su momento los abandonan a su suerte.

A nosotros nos decían que mantuviéramos a la Prepa en paz y así lo hacíamos. Nos dijeron que los enemigos eran los de los Comités de Lucha y a esos fue a los que les dimos duro.

Yo estoy con el sistema... estoy contra los comunistas. Yo sólo soy un patriota. Claro, ellos son más cultos por eso no les hacen nada.

Bueno, Mendiola Cerecedo (exjefe de la policía) era el más cuate. Con él era el aliviane, nos pasaba todo y a veces soltaba los billetes.

Yo soy un patriota, a mi modo, pero un patriota que siempre hizo lo que creyó mejor para la patria, al menos era lo que me decían que era lo mejor.

Por estas fechas también en otros Estados de la República se produjeron conflictos y hechos de violencia. Por ejemplo, en Coahuila los estudiantes luchan —aparentemente— por obtener la autonomía de su Universidad y por medio de manifestaciones presionaron al gobernador. El resultado fue que se creó la Universidad Libre de la Laguna.

En Morelia, Chihuahua y Toluca, los estudiantes secuestraron camiones para exigir que se satisficieran demandas académicas o mejoras en los servicios de transporte.

En Sonora, en cambio, se suscitó un conflicto más serio, pues un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico apedreó al candidato oficial del PRI a la gubernatura, a Briebich, en una de las giras de su campaña; hubo también una refriega callejera entre grupos antagónicos y la policía intervino utilizando gases lacrimógenos y “balas de goma”. Como resultado de todo ello fue cerrado temporalmente el Instituto Tecnológico.

En la Universidad Autónoma de Guerrero se produjeron enfrentamientos entre grupos antagónicos. El rector de dicha Universidad señaló que el enfrentamiento lo habían provocado grupos fascistas que querían impedir la realización del Congreso Constituyente de Estudiantes que aspiraban a introducir reformas académicas en la UAG.

Habría que consignar que también en Cuernavaca y en Tlaxcala se producen disturbios y enfrentamientos entre grupos antagónicos de estudiantes. Lamentablemente en los zafarranchos de Tlaxcala perdió la vida un estudiante.

Al finalizar el mes de abril el presidente Echeverría regresó de su largo viaje que incluyó países como Canadá, Reino Unido, Bélgica, Francia, Unión Soviética, y la República Popular China.

El mes de mayo es pródigo en acontecimientos de violencia y muerte en los centros de educación superior. La violencia estalló el 1o. de mayo en Puebla cuando la policía del Estado disparó contra varios estudiantes que, según su versión “pretendían” alterar el orden público aprovechando el desfile del 1o. de mayo.

Un hecho es cierto. Mientras las autoridades acusaban a los estudiantes de “haber pretendido alterar el orden”, la policía, que tenía órdenes de tirar a matar, disparó sus armas de precisión (en las que según el propio gobernador se invirtieron tres millones de pesos)

contra los estudiantes de la UAP dando muerte a cuatro de ellos e hiriendo a once más.

Hay que señalar que dos semanas antes, el 14 de abril, la policía había disuelto una manifestación estudiantil que marchaba en solidaridad con los campesinos que demandaban tierra.

El gobernador Bautista O'Farril ante la presión popular nacional se vio obligado a presentar su renuncia.

En Puebla la violencia fue desencadenada por la oligarquía en el poder contra los estudiantes que, de un modo o de otro, estaban aliándose con movimientos populares de obreros y campesinos.

En Sinaloa, dos semanas después (el 17 de mayo) se produjeron también actos de violencia en los que perdieron la vida el jefe del Departamento de Extensión Universitaria, Carlos Guevara Reynaga y el estudiante preparatoriano Pablo Ruiz García. En esos actos el grupo responsable de los asesinatos fue un grupo de "estudiantes" llamado los "enfermos". Los integrantes de este grupo, ideológicamente se ostentan como ultrazquierdistas y desde esta "posición" juzgan que la Universidad es una fábrica al servicio de la burguesía y, por lo mismo, piensan que hay que acabar con ella. Así, destruyeron vehículos y laboratorios y sabotearon investigaciones. Evidentemente estos planteamientos no resultan tan disparatados si se ven desde la perspectiva de las fuerzas más retrógradas que, de este modo, logran uno de sus más caros anhelos: el cierre o la paralización de los centros de educación superior.

Esta larga pero necesaria reseña de acontecimientos parece validar nuestra hipótesis, esto es, que efectivamente existen o han existido pugnas entre las clases dominantes y que en gran parte, dichas pugnas y ciertos intereses partidistas han sido el origen de los actos de provocación, los ataques y violencia en que se han visto envueltas las universidades del país.

Parece pues quedar claro que son intereses ajenos a las universidades los que han promovido y alentado dichos conflictos, pero sería erróneo culpar únicamente a la reacción o a "los emisarios del pasado" de todo lo sucedido.

En todo este juego político la izquierda —en su amplia y variada gama—, en cuanto no sea capaz de distinguir correctamente aquellos movimientos y demandas realmente democráticas, revolucionarias o progresistas, de los que sólo son actos de provocación y apoyo, indistintamente, a unos y otros, es y será responsable de los reveses que sufra la izquierda y que se conviertan en triunfos para la derecha.

Por todo lo anterior la responsabilidad para defender a la Universidad, en ésta y en cualquier coyuntura, debe recaer, principalmente, en la propia comunidad universitaria; y todo parece indicar que la primera tarea deberá ser la de trabajar para que se cobre, realmente, una *conciencia universitaria nacional* que lleve a defender a la Universidad de actos provocadores y que frene los ataques y la violencia que tienen como fin impedir que ésta cumpla sus funciones.